

Distr.  
GENERAL

CCPR/C/SR.1158  
29 de octubre de 1992

ESPAÑOL  
Original: FRANCES

COMITE DE DERECHOS HUMANOS

45° período de sesiones

ACTA RESUMIDA DE LA 1158a. SESION

celebrada en el Palacio de las Naciones, Ginebra,  
el lunes 20 de julio de 1992, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. POCAR

SUMARIO

Examen de los informes presentados por los Estados Partes de conformidad con el artículo 40 del Pacto (continuación)

Segundo informe periódico del Perú (continuación)

---

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Dichas correcciones deberán presentarse en forma de memorando y, además, incorporarse a un ejemplar del acta. Las correcciones deberán enviarse, dentro del plazo de una semana a contar de la fecha del presente documento, a la Sección de Edición de los Documentos Oficiales, Oficina E 4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas se reunirán en un documento único que se publicará poco después de la clausura del período de sesiones.

Se declara abierta la sesión a las 10.25 horas.

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 40 DEL PACTO (tema 4 del programa) (continuación)

Segundo informe periódico del Perú (continuación) (CCPR/C/51/Add.4, Add.5 y Add.6)

1. La Sra. Linares Arenaza, la Sra. Silva y Silva, el Sr. Revilla y el Sr. de Rivero (Perú) toman asiento como participantes a la mesa del Comité.
2. El PRESIDENTE recuerda que, de conformidad con la decisión del Comité adoptada en su 1148a. sesión, el Gobierno del Perú ha presentado una adición que contiene información complementaria (CCPR/C/51/Add.5) después del examen del segundo informe periódico del Perú (CCPR/C/51/Add.4) y que, de conformidad con una decisión adoptada en la sesión mencionada, había presentado un informe complementario (CCPR/C/51/Add.6) relativo, en particular, a la aplicación de los artículos 4, 6, 7, 9, 19 y 25 del Pacto. La Mesa decidió que el Comité tomaría nota de las respuestas contenidas en el documento CCPR/C/51/Add.5 sin proceder a un nuevo examen. Por consiguiente, se invita al Comité a examinar la adición (CCPR/C/51/Add.6) y, a continuación, a formular sus observaciones finales sobre el segundo informe periódico del Estado Parte en su totalidad.
3. El Presidente señala que la delegación peruana tiene previsto proyectar un vídeo para completar su presentación oral si el Comité no se opone a ello.
4. La Sra. HIGGINS manifiesta su satisfacción ante la reanudación del diálogo con los representantes del Gobierno del Perú. No obstante, la oradora se siente muy reticente en cuanto a la idea de autorizar la proyección de un vídeo, lo cual sería totalmente contrario al procedimiento que suele seguir el Comité y podría sentar un precedente peligroso y autorizar prácticas que resultarían lamentables, puesto que el tiempo de que dispone el Comité es precioso y el número de sesiones que dedica al examen de los informes de cada Estado Parte resulta limitado.
5. El Sr. SADI lamenta no poder compartir la opinión de la Sra. Higgins. Considera que nada impide al Comité modificar de manera positiva sus prácticas. En este caso, la proyección que propone la delegación peruana suministrará al Comité información útil sobre determinados hechos ocurridos recientemente en el Estado Parte.
6. El Sr. PRADO VALLEJO no tiene inconveniente en que se utilicen métodos nuevos que ayudarán al Comité a progresar en sus trabajos. No obstante, en este caso en particular, el orador duda de que la proyección del vídeo, muy probablemente destinada a ilustrar los actos de violencia perpetrados por Sendero Luminoso en el Perú y los esfuerzos del Gobierno por mantener la paz, aporte realmente datos de los que aún no disponga el Comité. Además, el Comité podría ponerse en una situación delicada, al crear un precedente que más adelante le obligaría a acceder a pedidos similares de otros Estados Partes.

7. El Sr. WENNERGREN agradece la propuesta formulada por la delegación peruana de suministrar al Comité la mayor cantidad de información posible y no se opondrá a la proyección del vídeo si ésta aporta datos que el Comité aún desconoce. En cambio, si se trata de ilustrar los actos terroristas cometidos en el Perú, el orador considera que los miembros del Comité están ya suficientemente informados. Por lo tanto, convendría preguntar a la delegación del Perú qué tipo de información contiene el vídeo.

8. El PRESIDENTE invita a un miembro de la delegación peruana a especificar el tema del vídeo.

9. La Sra. LINARES ARENAZA (Perú) declara que la delegación peruana considera útil presentar el vídeo al Comité para ilustrar no sólo la naturaleza de los actos de violencia perpetrados por grupos terroristas, entre ellos Sendero Luminoso, sino también los métodos utilizados por dichos grupos en sus campañas de adoctrinamiento, en particular en el interior de los establecimientos penales, sus prácticas militares y, en general, los niveles de violencia alcanzados en el Perú.

10. La Sra. CHANET no se opone en absoluto a la proyección del vídeo. Está convencida de que los miembros del Comité tendrán suficiente sentido crítico para juzgar el valor de la información transmitida por esas imágenes. Por otra parte, con respecto a la cuestión de principios, el artículo 40 del Pacto dispone que los Estados Partes se comprometen a presentar informes, pero no especifica que queda excluido el empleo de medios de comunicación modernos. Se trata esencialmente de garantizar el respeto a la libertad de expresión de los Estados Partes.

11. El Sr. EL SHAFFEI piensa que el Comité no ha perdido nunca su sentido crítico ante la información recibida de los Estados Partes, cualquiera sea la forma utilizada. Por consiguiente, la proyección de un vídeo no entraña ningún riesgo. Además el Estado Parte tiene pleno derecho a presentar al Comité toda la información que considere útil y no hay ninguna razón para que éste se informe por anticipado sobre la naturaleza de los datos que se le comunicarán.

12. El Sr. MULLERSON no estima que la proyección del vídeo pueda aportar más información sobre la violencia en el Perú que la ya obtenida en el período de sesiones anterior del Comité y la procedente de otras fuentes. Habida cuenta además de que se dispone de tiempo limitado, el orador no considera útil que se proyecte el vídeo propuesto por la delegación peruana.

13. El Sr. AGUILAR URBINA recuerda que el párrafo 2 del artículo 19 del Pacto estipula que toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir informaciones ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa y artística, "o por cualquier otro procedimiento de su elección".

14. El Sr. DIMITRIJEVIC plantea una cuestión de procedimiento y declara que es muy difícil examinar en sesión pública un problema de este tipo, por lo que propone que se le inscriba en el programa de una sesión privada ulterior del Comité.

15. El Sr. NDIAYE piensa, por el contrario, que el Comité no debe abandonar el debate de una cuestión importante entablado en sesión pública. Además, por cortesía debe recibir con el debido interés la propuesta de la delegación peruana y, con ánimo de objetividad, proyectar el vídeo para tener una opinión propia sobre las informaciones que contiene. Por último, las disposiciones del Pacto se limitan a solicitar a los Estados Partes que presenten informes al Comité y no especifican los medios que deben utilizarse con ese fin.

16. El Sr. LALLAH considera que debe continuarse el debate público de esta cuestión. Por su parte, opina que si bien los Estados Partes tienen derechos innegables y pueden presentar todos los datos que deseen en la forma que estimen adecuada, tienen también el deber de respetar el reglamento del Comité, que se aplica por igual a todos ellos. En tal sentido, se prevé que los datos suministrados por los Estados Partes deben ser transmitidos a los miembros del Comité con la debida anticipación, para que éstos puedan cumplir adecuadamente sus funciones.

17. El Sr. HERNDL estima que el Comité no está obligado a mirar el vídeo que se le propone. Además, debe evitar sentar un precedente cuyas consecuencias pueden ser irreversibles, por lo que conviene reflexionar detenidamente la cuestión antes de tomar una decisión al respecto.

18. El Sr. ANDO no se opone a que se proyecte el vídeo como parte de la exposición oral de la delegación del Estado Parte a condición de que los trabajos del Comité no se vean entorpecidos por ello. El Comité puede pronunciarse ulteriormente sobre la cuestión de fondo que se ha planteado.

19. El Sr. WENNERGREN recuerda que, de conformidad con el artículo 38 del reglamento del Comité, "... el Presidente podrá llamar al orden a un orador cuyas observaciones no sean pertinentes al tema que se está discutiendo". En consecuencia, el Comité podría acceder a la presentación del vídeo, en la inteligencia de que el Presidente podrá interrumpir la proyección si lo estima necesario.

20. El PRESIDENTE invita al Sr. Osvaldo de Rivero, representante permanente del Perú ante las Naciones Unidas en Ginebra a formular sus observaciones sobre las cuestiones mencionadas por los miembros del Comité.

21. El Sr. de RIVERO (Perú) está confundido por el prolongado debate que ha generado la propuesta de la delegación peruana, cuya pretensión no es sino presentar un vídeo de sólo diez minutos. Se trata de un medio de comunicación moderno utilizado en numerosos casos en los que se reconoce el derecho a recibir y a transmitir informaciones. Por su parte, la delegación peruana estima que la presentación del vídeo forma parte de su exposición oral y teme que, al negarse a ver el material filmado, el Comité siente un peligroso precedente, a saber: limitar la libertad de los Estados Partes para transmitir las informaciones que estima necesarias. Así, si se supiera que el Comité de Derechos Humanos en Ginebra se negó a ver un vídeo sobre la situación de violencia imperante en el Perú los principales interesados -es decir, las propias víctimas del terrorismo- podrían perder fe en los órganos de las Naciones Unidas. Por otra parte, sería muy sorprendente que los miembros del Comité dejaran de ejercer su discernimiento tras haber visto el vídeo.

22. El Sr. DIMITRIJEVIC declara que el Comité, sin crear un precedente, puede decidir que aceptará ver el vídeo, en la inteligencia de que a continuación deberá revisar su reglamento, a fin de incluir en él las técnicas de comunicación modernas y de especificar las normas que se aplican a la presentación oral de informes (duración y medios utilizados).

23. El Sr. SADI recuerda que los vídeos se utilizan, en particular, en los tribunales y parlamentos. El orador considera que, con objeto de favorecer un diálogo constructivo con la delegación peruana, el Comité debe aceptar ver el vídeo anunciado.

24. El Sr. PRADO VALLEJO piensa que, por cortesía, el Comité debe acceder a la solicitud de la delegación del Perú, sin perjuicio de una ulterior revisión de su reglamento.

25. El PRESIDENTE cree entender que, en su mayoría, los miembros del Comité son favorables a la idea de autorizar la proyección de un vídeo de corta duración como parte de la exposición oral de la delegación peruana y, de conformidad con el artículo 38 del reglamento, propone que se acceda a la solicitud de la delegación del Perú.

26. Así queda acordado.

27. La Sra. LINARES ARENAZA (Perú) agradece al Comité por haber accedido a la solicitud del Perú y permitirle de esta manera responder, durante el 45º período de sesiones en curso, a las numerosas e importantes preguntas formuladas en el 44º período de sesiones y presentar una adición (CCPR/C/51/Add.6) a los datos que comunicó el Gobierno peruano (CCPR/C/51/Add.5) después del examen del segundo informe periódico del Perú (CCPR/C/51/Add.4).

28. La violencia desatada por los grupos terroristas en el Perú se puso nuevamente de manifiesto en los últimos días con la explosión, en la ciudad de Lima, de dos coches bombas cargados respectivamente de 600 kg y 120 kg de explosivos, que dejaron un saldo de más de 20 muertos y 200 heridos de extrema gravedad y provocaron también daños materiales en un perímetro importante. Pero el tributo que se paga a la violencia es aún más alto si se piensa en todas las vidas inocentes sacrificadas a diario. En ese contexto, la delegación peruana desearía que el Comité considere las disposiciones jurídicas y prácticas tomadas por las autoridades de su país para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y, en particular, de los enunciados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En relación con esto, la delegación peruana recuerda la resolución 1992/42 de la Comisión de Derechos Humanos, en la que se afirma que los grupos armados que siembran el terror, así como los narcotraficantes, impiden el goce efectivo de los derechos humanos (segundo párrafo del preámbulo). Conviene también en ese contexto situar los esfuerzos realizados por las autoridades para la aplicación de los artículos del Pacto y tener también en consideración los problemas que surgen.

29. Entre los principales dispositivos emitidos en el Perú, la delegación cita en primer lugar el Decreto legislativo Nº 652, por el que se creó el Consejo por la Paz, compuesto por representantes de las instituciones

nacionales que llevarán a cabo el Plan de Pacificación Nacional, considerado prioritario por el Gobierno peruano. La delegación cita también el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social, establecido para financiar proyectos de desarrollo de infraestructuras y actividades de interés social en los ámbitos de la salud y la educación. Corresponde destacar también el lanzamiento del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONA), cuya finalidad es mejorar el nivel de alimentación y nutrición de la población. Siempre en el campo social, cabe mencionar la Comisión Especial encargada de elaborar el Plan Nacional de la Infancia (1992-1995). Se creó también la Oficina de apoyo a la autogestión urbanomarginal, a fin de respaldar y financiar proyectos de interés social, en particular en los asentamientos urbanomarginales de Lima y de El Callao.

30. Con respecto a los dispositivos emitidos para favorecer la plena vigencia de los derechos humanos, el Decreto legislativo N° 665 faculta a los fiscales o magistrados de instrucción en las zonas declaradas en estado de emergencia a ingresar en las comisarías de policía o las prefecturas así como en los establecimientos militares y en cualquier otro lugar de detención, para verificar la situación de los detenidos o investigar denuncias de presuntas desapariciones.

31. El Decreto-ley N° 25499 establece los términos según los cuales los incursores en delito de terrorismo pueden beneficiarse de medidas de reducción, exención, remisión o atenuación de penas. En virtud del Decreto-ley N° 25490 se creó el Ministerio de la Presidencia encargado de atender las necesidades de la población mediante el desarrollo de obras de infraestructura y programas de apoyo social.

32. De conformidad con el Decreto-ley N° 25582, se excluye de pena a quien, siendo objeto de una investigación policial o judicial, suministre información veraz y efectiva. Asimismo, el Decreto-ley N° 25592 sanciona el delito de desaparición forzada de personas cometida por funcionarios o servidores públicos y crea el Servicio de Registro de Denuncias de Desapariciones en cada dependencia policial y a nivel nacional, que trabaja en coordinación directa con los servicios de la Fiscalía de la Nación.

33. Con respecto a las medidas prácticas formuladas por intermedio de la Fiscalía de la Nación, la delegación del Perú destaca los programas cuya finalidad es acelerar los procesos de investigación fiscal y, en particular, las denuncias de presuntas desapariciones. Se han dictado directivas de funcionamiento y organización de las fiscalías provinciales a nivel nacional, sobre todo en procesos relacionados con los derechos humanos. El Servicio de la Fiscalía de la Nación ha organizado también un programa de seminarios y conferencias sobre la plena vigencia de los derechos humanos, destinado no sólo a los representantes del ministerio público sino, también, a representantes de las fuerzas armadas y policiales y al público en general. Por último, la Fiscalía de la Nación trabaja actualmente en la creación de un Registro Nacional de Detenidos que permitirá obtener los datos necesarios sobre cualquier detención que se haya producido en cualquier ciudad del país. El Registro, administrado por el Ministerio Público y dirigido por el Servicio de la Fiscalía de la Nación, cuenta con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos de América y del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del

Delincuente. Cabe citar también una propuesta del Ministerio de Justicia de incorporar al Consejo Nacional de Derechos Humanos, creado en virtud del Decreto supremo N° 012 de 1986, a miembros del servicio de la Fiscalía de la Nación y del Ministerio de Defensa, completando así la representación de instituciones abocadas a la defensa, la protección y la vigencia de los derechos humanos.

34. Cabe destacar que en el Perú no se aplica una política de violación sistemática del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni gozan tampoco en el país de impunidad permanente los autores de algunos hechos aislados que puedan haber sido cometidos por servidores públicos al aplicarse la política antiterrorista y en la lucha contra el narcotráfico.

35. Al mirar el vídeo que se les presentará y que la delegación peruana irá comentando, los miembros del Comité podrán hacerse una idea de las diversas formas que adopta la violencia terrorista en el Perú, de los atentados con los que viven cada día los peruanos y, sobre todo, de los métodos de adoctrinamiento y de entrenamiento utilizados por los grupos terroristas, en particular Sendero Luminoso. Las imágenes que componen el vídeo proceden de noticieros de diversas emisoras televisivas peruanas que no siempre están de acuerdo con la política establecida por el Gobierno.

36. La primera secuencia muestra los escombros del centro técnico de Huaral, totalmente destruido en un atentado terrorista en el que murieron tres agentes extranjeros de cooperación técnica internacional. A continuación se ven secuencias de atentados cometidos contra miembros de la sociedad civil, la destrucción de la red nacional de distribución de electricidad y atentados contra diversas industrias nacionales y escuelas situadas en el área urbana de la ciudad de Lima.

37. Las secuencias siguientes muestran atentados en las regiones rurales del interior del país e incluyen las denominadas rondas campesinas, creadas espontáneamente por la población frente a la necesidad de defenderse y de contrarrestar el fenómeno de la violencia terrorista. Los campesinos fabrican, con los materiales de que disponen, algunas de las armas que utilizan para defender sus cultivos y su supervivencia misma. Estas milicias no están subordinadas a ningún comando politicomilitar, pero sí están controladas en cuanto a su organización; por otra parte, existen en la historia peruana antecedentes de este tipo de formación. Las rondas campesinas se han convertido en el blanco de los ataques terroristas, ya que su existencia es un signo del fracaso de la política terrorista de penetración en el país.

38. Sigue una secuencia en la que puede verse a los miembros de la cúpula de Sendero Luminoso y, en primer lugar, al "Presidente Gonzalo" (A. Guzmán Reinoso) celebrando con una fiesta el aniversario de un acto terrorista. Pero este tipo de aniversarios se celebran también mediante otros atentados y ataques organizados en todo el país. La secuencia fue filmada en una de las residencias ocupadas en algún momento por la cúpula de Sendero Luminoso y permitió conocer el rostro de algunos de los principales ideólogos de ese movimiento, responsables de la política de terror que existe actualmente en el Perú y que impide el goce de los derechos humanos en toda su amplitud.

39. En la secuencia siguiente pueden verse atentados de otro tipo ocurridos en diversas localidades rurales, así como la forma en que los dos movimientos terroristas, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, se infiltran en las zonas urbanas en las que organizan atentados, por ejemplo, en la periferia del Palacio de Gobierno y de la sede de las instituciones judiciales del país. Puede verse también, en otra secuencia, el accionar de ambos movimientos en los asentamientos populares de Lima (Cerro del Pino). Siguen estadísticas en las que figuran las ciudades y los departamentos del Perú en donde se produce el mayor número de atentados, siendo Lima el principal objetivo del terrorismo, ya que hasta el mes de abril de 1992 se produjeron en la capital 290 atentados.

40. La secuencia que sigue, filmada en un establecimiento penitenciario de Lima, muestra sesiones de adoctrinamiento, con marchas y cánticos, organizadas en la prisión por miembros de Sendero Luminoso. En ellas se hace la apología del terrorismo y de la ideología del marxismo-leninismo-maoísmo y se difunde el denominado "pensamiento Gonzalo", que propugna el caos y la destrucción en el país. En este establecimiento penitenciario se urden también numerosos atentados. Se ve asimismo una representación teatral ante familiares de internos terroristas, que escenifica el asesinato por un miembro de Sendero Luminoso de dos representantes de las fuerzas armadas y de la policía. Esta película fue hallada durante una incursión policial en una casa que sirvió de residencia en alguna oportunidad a los líderes de ese movimiento terrorista.

41. En las imágenes que siguen aparece una dirigente de diversas organizaciones populares, teniente alcaldesa de un distrito de Lima y presidenta de clubes de madres, comités de vasos de leche y comedores populares, que explica a los habitantes del distrito que Sendero Luminoso está contra el pueblo y no obra en absoluto por la justicia. A continuación, se ve a la alcaldesa inaugurar una cocina popular. Esta mujer ejemplar, que propugnaba vencer al terrorismo no por las armas sino a través de la acción benéfica de las organizaciones populares de base, fue asesinada por Sendero Luminoso en febrero de 1992, precisamente cuando se reunía en Ginebra la Comisión de Derechos Humanos.

42. Las últimas imágenes muestran las destrucciones provocadas por tres atentados recientes de Sendero Luminoso, perpetrados con camiones bombas y otros vehículos cargados de explosivos.

43. La delegación peruana no ha querido mostrar el vídeo en un afán sensacionalista, sino para que el Comité conozca realmente lo que sucede en el Perú a diario y comprenda mejor el contexto en el que deben considerarse los esfuerzos realizados por el Gobierno para aplicar los derechos consagrados en el Pacto.

44. El PRESIDENTE invita a los miembros del Comité a que formulen sus observaciones y hagan preguntas sobre la información complementaria presentada por el Gobierno peruano (CCPR/C/51/Add.5 y 6) en relación con cada artículo, empezando por el artículo 4.

45. El Sr. PRADO VALLEJO expresa su satisfacción por la presencia ante el Comité de una alta funcionaria del Ministerio de Justicia, que pone de manifiesto el lugar cada vez más importante que ocupa la mujer en el Perú.



La presentación de los informes complementarios y la proyección del vídeo demuestran la buena predisposición que tiene la delegación peruana hacia el Comité.

46. En relación con el estado de emergencia, al que se hace referencia en el artículo 4 del Pacto, es difícil tener una idea exacta de la situación, puesto que los dos informes complementarios se refieren únicamente a la situación jurídica; pero, de hecho, aquélla está íntimamente entrelazada con la situación concreta, lo que obliga a hacer algunas observaciones. Es indudable que las atrocidades cometidas por Sendero Luminoso han sucedido realmente y que deben ser condenadas por el Comité y por todos los hombres de buena voluntad. Pero, aunque los últimos documentos procedentes del Perú fueron redactados con posterioridad al golpe de Estado, no se mencionan en ellos los medios empleados por el Gobierno para garantizar los derechos humanos en una situación de crisis y violencia generalizadas. En uno de los informes complementarios (CCPR/C/51/Add.5) sólo se declara que la maquinaria judicial sigue funcionando y se conservan las garantías establecidas incluso durante el estado de emergencia. Pero el Comité sigue sin saber qué derechos fueron suspendidos durante el estado de emergencia -cuando, en realidad, algunos derechos consagrados en el Pacto no pueden ser restringidos o suprimidos- y cuáles siguen en vigencia. Esto es tanto más inquietante cuanto que el sistema jurídico y judicial del Perú se modificó sustancialmente desde la fecha en que se examinó el segundo informe periódico. El poder judicial ya no es independiente, ya que todos los miembros de los tribunales fueron suspendidos de sus funciones -lo que paralizó durante algún tiempo al sistema judicial- y sustituidos por magistrados designados directamente por el Presidente de la República. En semejante contexto, cabe preguntarse cuál es realmente la situación con respecto a la vigencia de los derechos humanos en el Perú.

47. El Sr. Prado Vallejo señala a la atención de la delegación peruana el párrafo 8 del documento CCPR/C/51/Add.5, que dice lo siguiente: "... el asumir las fuerzas armadas el control del orden interno... no implica que el ministerio público y el poder judicial no asuman la labor jurisdiccional que les corresponde conforme lo establece la Constitución política del Perú". Esta afirmación plantea un problema, ya que en la actualidad no hay constitución política nacional en el Perú. Por lo tanto, cabe preguntarse sobre el funcionamiento general de la administración de justicia en el país. En el mismo documento, se afirma que el Jefe de Estado impartió órdenes a los fiscales a fin de que ingresaran en las comisarías, los centros de detención y todos los establecimientos penitenciarios para informarse sobre las condiciones de detención; no obstante, en su 44º período de sesiones, el Comité observó que esas órdenes no se respetaban y que los militares impedían el ingreso a los lugares de detención no sólo de los fiscales sino, inclusive, de la Cruz Roja. En la actualidad, con todo el poder en manos del Presidente de la República, ¿puede tenerse la garantía de que los militares respetan las instrucciones de éste?

48. Si bien nadie pone en tela de juicio la necesidad que tiene toda sociedad de defenderse contra la violencia terrorista y de castigar a los responsables, el hecho es que los actos condenables perpetrados por los dos movimientos terroristas en el Perú son sólo uno de los aspectos de la situación. Diversas

fuentes fidedignas de información confirman que las fuerzas armadas y la policía cometen, a su vez, graves violaciones de los derechos humanos. El vídeo que acaba de proyectarse presentó atentados con bombas imputables a Sendero Luminoso, pero se han descubierto decenas de cuerpos con marcas de torturas en fosas comunes excavadas por las fuerzas armadas. En los departamentos bajo control de las fuerzas armadas en virtud del estado de emergencia, el pueblo padece dos tipos de violencia. Las rondas campesinas se organizaron para oponerse a Sendero Luminoso; pero algunas de ellas están al servicio de las fuerzas de seguridad, que les entregan armas para que luchen contra otros campesinos sospechosos de simpatizar con el movimiento terrorista. Por consiguiente, los campesinos en esas regiones sufren persecuciones tanto de Sendero Luminoso como de las fuerzas armadas. El Estado tiene el deber de detener la violencia terrorista y, al mismo tiempo, poner fin a los excesos de sus propias fuerzas armadas. Pero, según las últimas informaciones disponibles, nada se ha hecho por enjuiciar a los responsables o, ni siquiera, para investigar los crímenes cometidos, mientras que sigue aumentando el número de desaparecidos. Cabe preguntarse qué hacen los nuevos jueces designados directamente por el Presidente de la República. Además, las fuerzas armadas participan en el narcotráfico, al cobrar un porcentaje de las ganancias procedentes de la venta de drogas y al exterminar a quienes no pagan, como se explicó durante la última reunión de la Comisión Andina de Juristas, celebrada en su sede en Lima. Por otra parte, el vídeo mostró una sesión de adoctrinamiento de Sendero Luminoso en una prisión de Lima. Pero corresponde destacar que hace alrededor de un mes un importante contingente militar armado de metralletas invadió un establecimiento penitenciario, destruyéndolo completamente y dejando un número aterrador de muertos.

49. El Sr. Prado Vallejo disiente de la afirmación hecha en el párrafo 9 del documento CCPR/C/51/Add.6, según la cual pocos organismos internacionales de derechos humanos se preocupan por los niños huérfanos y las viudas, por lo que "esta actitud indiferente ha dado lugar a que en el Perú se piense que sólo los terroristas libres o recluidos en las cárceles tienen derechos humanos". Nada justifica una afirmación de esta naturaleza y es bien sabido que todos los organismos de defensa de los derechos humanos se preocupan por la suerte de la población civil. Pero la realidad es que la situación en el Perú es muy compleja, por lo que los organismos que trabajan por los derechos humanos piden a todas las autoridades del Estado que actúen de manera concertada contra la violencia terrorista y la violencia de sus propias fuerzas de seguridad.

50. En el mismo documento, se declara que el Gobierno, resuelto a superar la situación de emergencia política, ha decidido convocar a elecciones en noviembre de 1992 con objeto de designar a los miembros de una asamblea constituyente. Se dice, además, que fue necesario quebrantar el orden constitucional debido al caos general y a la corrupción de los jueces y de todos los organismos del Estado. De ser así, cabe reflexionar por qué razón los nuevos diputados del Congreso serían mejores que los precedentes y de qué manera la preparación de una nueva constitución, dimanada de los partidos políticos tradicionales, lograría terminar con el caos y la corrupción.

Es difícil aceptar la idea de que, con el pretexto de reconstruir la democracia, se implante una dictadura. Las nuevas instituciones del Estado, surgidas de los mismos procedimientos, harán exactamente lo mismo que las anteriores y es muy dudoso que de ello nazca una nueva democracia capaz de garantizar adecuadamente la protección de los derechos humanos.

51. La pregunta fundamental que se plantea entonces es saber qué medidas ha tomado el Presidente de la República desde el 5 de abril de 1992, para resolver estos problemas presuntamente heredados ya que todo depende de él y no hay más Congreso, poder judicial, orden constitucional o tribunales independientes. ¿Qué se ha hecho para investigar las desapariciones, garantizar que los detenidos tengan un juicio justo, respetar el principio de la separación de poderes y, en general, asegurar la plena vigencia de los derechos humanos?

52. El Sr. AGUILAR URBINA desearía que la delegación peruana diera una respuesta específica a dos preguntas. Primero, ¿para el Gobierno peruano, la Constitución política se halla siempre vigente? Y segundo, ¿sobre qué bases constitucionales se fundamentan las medidas de emergencia y de reconstrucción nacional?

53. El Sr. SADI considera que la información complementaria presentada por escrito y verbalmente al Comité confirma que Sendero Luminoso es efectivamente una organización terrorista. No obstante, el Comité opina que el terrorismo no debe ser combatido nunca con el contraterrorismo. El diálogo con las autoridades peruanas sería más constructivo si éstas compartieran el punto de vista del Comité. El Sr. Sadi recuerda que el artículo 4 del Pacto no prevé ningún motivo que pueda justificar la aplicación de alguna forma de contraterrorismo y que en virtud del citado artículo algunos derechos no admiten derogación. En particular, se producen fenómenos muy inquietantes como desapariciones o ejecuciones extrajudiciales que tienen una importancia fundamental en relación con la aplicación del artículo 4 del Pacto. Por ello, el Sr. Sadi pregunta qué medidas concretas han tomado las autoridades para poner fin a la tendencia de las fuerzas de seguridad del Estado a combatir el terrorismo mediante otra forma de terrorismo, ya que es ésta realmente la situación. Los informes complementarios presentados por la delegación peruana no dan aclaraciones suficientes sobre todos estos aspectos. Por otra parte, en el Perú existe quizá un problema de comunicación entre el Gobierno civil y la estructura militar y sería importante que el Comité dispusiera de más información al respecto. En general, el Sr. Sadi desea saber de qué manera se proponen las autoridades peruanas hacer respetar de buena fe las disposiciones del artículo 4. El orador desearía que se comprometieran a observar el espíritu y la letra del artículo mencionado y espera que la delegación peruana enumere en detalle las medidas adoptadas para lograr que las fuerzas armadas respeten las disposiciones del Pacto y poner fin a los actos de violencia y represión brutal que siguen produciéndose.

54. La Sra. CHANET considera que la información suplementaria presentada por la delegación peruana suscita varias observaciones y preguntas. En efecto, los párrafos 2, 3 y 4 del documento CCPR/C/51/Add.6, en los que se describe la situación que obligó a tomar las medidas adoptadas el 5 de abril de 1992, contrastan con las declaraciones de la delegación peruana formuladas

en Nueva York en el período de sesiones anterior del Comité. En particular, en el párrafo 4 se declara que la administración de justicia estuvo ganada por el sectarismo político, la vanalidad y la irresponsabilidad. La Sra. Chanet señala que la delegación peruana había hecho declaraciones muy diferentes en el período de sesiones anterior, en el que efectivamente se había explayado sobre la situación de violencia y terrorismo imperantes, pero afirmando al mismo tiempo que las autoridades controlaban la situación. Además, el estado de las instituciones parecía mucho menos catastrófico que el que se describe en el documento CCPR/C/51/Add.6.

55. La Sra. Chanet recuerda que en su período de sesiones anterior el Comité había solicitado a la delegación peruana información muy específica sobre los cambios intervenidos desde el examen del segundo informe periódico (CCPR/C/51/Add.4) y no sobre la legislación nacional. Pero debe admitirse que los datos complementarios presentados por escrito y verbalmente no aportan ningún elemento concreto sobre los sucesos que fundamentaron la decisión del 5 de abril pasado ni sobre la aplicación de las disposiciones del Pacto en los últimos tres meses. En particular, no se dio ninguna información sobre la suspensión de las instituciones. Tampoco se ha suministrado al Comité el texto de un cierto número de decretos-leyes aprobados durante el período mencionado, cuya redacción exacta le permitiría hacerse una idea clara de la situación con respecto a las disposiciones del Pacto.

56. La Sra. Chanet hace suya la pregunta planteada por el Sr. Aguilar Urbina sobre la Constitución y desearía saber, en particular, qué base jurídica tienen los Decretos-leyes Nos. 25418 y 25419. La oradora agrega que le interesa sobremanera saber qué base jurídica fundamentó la aprobación del Decreto-ley N° 25419, ya que en virtud de esta disposición se suspendió en el Perú la administración de justicia en su totalidad. Además, el Gobierno de emergencia y de reconstrucción nacional, en contradicción con las disposiciones previstas por el procedimiento constitucional, sustituyó a los jueces por otros magistrados y disolvió también el Consejo Nacional de la Magistratura, que participa en la designación de estos altos funcionarios, sin que la Constitución peruana prevea una medida de este tipo.

57. Con respecto al artículo 4 del Pacto, la Sra. Chanet desea saber por qué se tomó exactamente en aquel momento la decisión de 5 de abril de 1992 y qué circunstancias especiales justificaron que se eligiera esa fecha, dado que la violencia es un fenómeno cotidiano en el Perú. ¿Qué poderes tiene el Gobierno actual? ¿Comunicó dicho Gobierno al Secretario General de las Naciones Unidas información relativa a la proclamación del estado de emergencia en el Perú, y qué derechos quedaron suspendidos en virtud del estado de emergencia? ¿Qué sucede, en ese caso, con los derechos que no pueden suspenderse en virtud del artículo 4 del Pacto, en particular el derecho a la vida?

58. Tras haber asistido a la proyección del vídeo presentado por la delegación peruana, la Sra. Chanet manifiesta su perplejidad con respecto a la idea que tienen las autoridades peruanas de la aplicación del artículo 6 del Pacto y, más exactamente, del derecho a la vida. En relación con la existencia de las denominadas rondas campesinas, la oradora destaca que el Estado no debe responder con violencia a la violencia ni mucho menos permitir que la población haga justicia por sus propias manos y tome las armas, como

evidentemente sucede en el Perú. Al actuar de esa forma, las autoridades peruanas contribuyen a acrecentar la violencia, no respetan las disposiciones del artículo 6 del Pacto y, en general, no están tomando las medidas adecuadas para restablecer una situación de plena vigencia de los derechos humanos.

59. La Sra. Chanet manifiesta también su asombro con respecto al adoctrinamiento de los detenidos por militantes de Sendero Luminoso. En efecto, la oradora está sorprendida de que las autoridades se vean obligadas a permitir el ingreso de la policía en las prisiones -poniendo, además en peligro la vida de policías y detenidos- para impedir la filmación de vídeos, el funcionamiento de una imprenta o una representación teatral con fines proselitistas, sobre todo habida cuenta de que los lugares de detención son espacios cerrados que deberían ser fáciles de controlar. Las autoridades no tendrían por qué recurrir a medidas tan severas, claramente excesivas para la situación. Todos los elementos mencionados permiten pensar que el Estado carece de la autoridad necesaria y que la situación en su conjunto plantea problemas para la aplicación del artículo 6 del Pacto.

60. Por último, la Sra. Chanet desea saber de manera general qué medidas tomó el Gobierno peruano para tratar de dar una respuesta que no sólo sea la fuerza y la violencia a la crisis por la que atraviesa actualmente el país.

61. El Sr. MULLERSON lamenta que los datos complementarios presentados por la delegación peruana se refieran únicamente a la legislación y no a la práctica.

62. El orador recuerda que, como lo hicieron ya otros miembros del Comité, condenó personalmente las atrocidades cometidas por Sendero Luminoso y otros grupos políticos. Pero esta situación no puede justificar de ningún modo que el Estado reaccione con violencia, ejerciéndola en particular contra personas inocentes. Se dispone de información de múltiples fuentes según la cual las fuerzas policiales y algunas organizaciones paramilitares han cometido asesinatos y actos brutales. El Sr. Müllerson observa que la delegación peruana no suministró nueva información al respecto. El orador hubiera deseado que, en lugar del vídeo presentado al Comité, la delegación peruana enumerara, de ser necesario mediante imágenes, los esfuerzos del Gobierno por luchar contra los actos violentos que perpetran sus propias fuerzas. Con respecto al estado de emergencia, el Sr. Müllerson estima que la actitud adoptada por las autoridades peruanas no constituye un ejemplo para otros países que también atraviesan una situación económica difícil, disturbios sociales y un aumento de la delincuencia. Es evidente que el Perú combate muy mal los problemas que lo aquejan.

63. El Sr. Müllerson pregunta si la ley peruana prevé la disolución del Congreso en caso de proclamarse el estado de emergencia. El orador señala que en muchos países el Parlamento ejerce cierto control sobre las modalidades del estado de emergencia. Desearía saber, también, qué resultados positivos se obtuvieron mediante la disolución del Congreso y las disposiciones aplicadas a los tribunales. Aunque el objetivo manifiesto de estas medidas era luchar contra el terrorismo, el Sr. Müllerson tiene dudas con respecto al éxito obtenido.

64. En relación con el artículo 4 del Pacto, en el párrafo 17 del documento CCPR/C/51/Add.6 se afirma que "en el caso del Perú, siempre ha existido respeto por estos derechos normados en los artículos 6, 7, 8 (párrs. 1 y 2), 15, 16 y 18 del Pacto, habiendo sido recogidos en... la Constitución". Pero, en su período de sesiones anterior, el Comité observó que los artículos 6 y 7 del Pacto, es decir, las disposiciones más importantes de ese instrumento, habían sido violados incluso antes de proclamarse el estado de emergencia y de disolverse el Parlamento. En consecuencia, el Sr. Müllerson quisiera que se le aclare cuál es la situación actual en ese sentido.

65. El Sr. WENNERGREN desea saber qué derechos de los enunciados en el artículo 4 del Pacto fueron suspendidos en virtud del estado de emergencia. Al igual que el Sr. Müllerson, el orador encuentra, en el párrafo 17 del documento CCPR/C/51/Add.6, una afirmación que equivale a decir que en el Perú, contrariamente a lo que ha dado a entender hoy la delegación peruana, se han respetado siempre las disposiciones del párrafo 2 del artículo 4 del Pacto. Al parecer, cuando se proclama el estado de emergencia, la Constitución dispone la suspensión de las garantías constitucionales relativas, en particular, a la libertad y la seguridad de las personas. Por consiguiente, es muy importante aclarar esta cuestión y saber qué derechos -y en aplicación de qué decretos-leyes- pueden o no ser suspendidos en virtud del estado de emergencia. El Sr. Wennergren desea que se responda de manera más exacta a estas preguntas.

66. En relación con la cuestión de los poderes de los magistrados, la delegación declaró que éstos podían contribuir considerablemente al respeto de los derechos humanos, en particular realizando investigaciones, etc. A la luz del párrafo 10 del documento CCPR/C/51/Add.5, el Sr. Wennergren quisiera saber qué medidas se han tomado para permitir que los magistrados realicen investigaciones y para ampliar sus poderes, en el marco de la difícil coyuntura por la que atraviesa el país. Por último, en su período de sesiones anterior, el Comité había solicitado información sobre el asesinato de un magistrado y la delegación peruana se había comprometido a presentarle una respuesta por escrito. Lamentablemente, el Sr. Wennergren observa que, salvo error de su parte, las informaciones complementarias presentadas no incluyen ningún dato al respecto.

67. El PRESIDENTE invita a los miembros del Comité a continuar el examen del segundo informe periódico del Perú (CCPR/C/51/Add.4, 5 y 6) en una sesión ulterior.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.